

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. - ORAL
SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

PROCESO	11001 33 35 029 2020 00020 00
DEMANDANTE	MYTIAM GUZMÁN DE MENA
DEMANDADO	UGPP
MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
CONTROVERSIA	SUSTITUCIÓN PENSIÓN GRACIA

OBJETO

Procede el Despacho a resolver el **RECURSO DE REPOSICIÓN** en subsidio de **APELACIÓN**, propuesto por la apoderada judicial de la parte demandante en el proceso de la referencia, en contra del auto por medio del cual se negó el decreto de la medida cautelar.

ANTECEDENTES

La señora **MYRIAM GUZMÁN DE MENA**, actuando por conducto de apoderado judicial promueve demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la **UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES – UGPP**, con miras a que, previa declaratoria de nulidad de los actos administrativos demandados, se ordene la sustitución de la pensión gracia que en vida disfrutara el señor **JOSÉ FRANCISCO MENA**.

En el mismo sentido, se solicitó decretar **MEDIDA CAUTELAR** consistente en suspensión de los actos administrativos demandados, con fundamento en los hechos y pruebas de la demanda; argumentando que son contrarios a la Constitución Política, a la Ley y a los precedentes jurisprudencia y que, por cuenta

de ello es viable que, de manera transitoria se reconozca el derecho pensional pagando las mesadas que le correspondan hasta tanto se profiera el fallo, considerando también la situación que está atravesando el país y el mundo por la crisis de salubridad que ha afectado la economía de diferentes hogares, lo cual no resulta ser ajeno a la demandante, pues al faltar su cónyuge no sólo se ha visto conmocionada sentimental y afectivamente, sino también ha tenido que afrontar la considerable disminución de sus ingresos para subsistir.

Lo anterior, aunado a la necesaria protección de los derechos fundamentales a la vida digna, la igualdad material, el debido proceso, la seguridad social de la actora, junto con el respeto por los criterios de prevalencia del interés general y de sostenibilidad financiera, lo llevan a reiterar la solicitud del transitorio de la sustitución pensional hasta tanto se desarrolle el fallo que reconozca la pensión.

Señala que no se encuentra acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, para acceder al decreto de la medida preventiva solicitada y que, la señora **MYRIAM GUZMAN DE MENA** en ningún momento aportó “documentos, informaciones, argumentos y justificaciones”, que permitan establecer que tan gravosa sería la situación en caso de no acceder a la suspensión de los actos administrativos mencionados.

Por otra parte, aduce que, la UGPP se encuentra a la espera de que la demandante demuestre tener el derecho solicitado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.

Teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos por las partes, el Despachó negó el decreto de la medida cautelar, luego de considerar que a la luz de los requisitos establecidos en el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, no se encontraba probada la existencia de un perjuicio irremediable que condujera a aceptar el decreto de dicha medida y que por tal razón: “el problema jurídico que depende

básicamente del acervo probatorio que se analice dentro del asunto, y prima facie no da lugar a concluir que el acto administrativo enjuiciado se encuentre fuera de la órbita de legalidad; sin que esto implique un prejuzgamiento, toda vez que en el transcurso del proceso y especialmente en la etapa probatoria se entrará a determinar cuál fue el verdadero motivo por el cual no se concedió la pensión de sobrevivientes"; lo anterior, habida cuenta, que, con la solicitud del decreto de la medida cautelar no se allegaron la totalidad de las pruebas necesarias para tomar la decisión correspondiente; por lo que, atendiendo que: "las medidas cautelares están llamadas a proceder cuando la violación invocada surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud"; se corroboró que la decisión que correspondía era negar la solicitud de la medida, ante la imposibilidad de proceder de conformidad con lo expuesto.

EL RECURSO

El apoderado de la parte actora presenta recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la anterior decisión, recordando que, conforme al artículo 232 del CPACA, las medidas cautelares no solo proceden ante la existencia de un perjuicio irremediable, sino que, es viable decretarla cuando, al confrontar el acto con las disposiciones reputadas como violadas, surja evidente esa vulneración o, cuando fruto del análisis de las pruebas arrojadas con la solicitud, lleven a la conclusión de la procedencia de la declaratoria de la medida cautelar; destacando que las dos posibilidades las da la ley, en donde, para la primera de las opciones no se exige aportar prueba alguna; argumento que refuerza citando apares de la sentencia del Consejo de Estado del 29 de noviembre de 2016, CP. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicado 11001-03-25-000-2012-00474-00(1956-12), en la cual se analizan los aludidos requisitos de ley; en donde, cuando se pretende una medida cautelar negativa, esto es, la suspensión provisional de un acto

administrativo, los requisitos de procedibilidad pueden aplicarse dependiendo el tipo de proceso que se impetra, es decir:

- a. **Especiales:** Cuando la demanda pretende solo la nulidad del acto administrativo o si la demanda pretende el restablecimiento del derecho e indemnización de perjuicios (Perjuicios materiales y morales).
- b. **Comunes:** Todas las medidas cautelares.

Anotando frente a lo anterior que, "para el proceso de la referencia de nulidad y restablecimiento del derecho, aplica los requisitos de procedibilidad para las medidas cautelares especiales de contrastar el acto con la norma violada, sin lugar a requerir prueba calificada de perjuicios, ya que en el proceso no se están reclamando los mismos, es decir, invocamos la causal especial parte inicial de la norma en cita: a) que exista una vulneración de las normas superiores invocadas – por confrontación del acto demandado con las normas superiores"; destacando que al efectuar la confrontación, los actos administrativos demandados resultan ser contrarios a normas de rango constitucional (artículos 48 y 53) y que, por ello se evidencia que: "en el acto inicial que niega la sustitución de la pensión - Resolución RDP 029501 del 18 de diciembre de 2020, la excusa es que el causante no tenía derecho a la pensión gracia y que por ende no podía sustituirla" por lo que: "ante tal error garrafal, al desatar el recurso con la resolución RDP 007032 del 17 de marzo de 2021, la excusa fue además que el docente - causante no reunió los requisitos para la pensión gracia, quiso dar legalidad al acto de negación de la sustitución, alegando que la actora no acreditó la convivencia, cuando los documentos objeto de estudio los tuvo desde el primer momento y ello no lo alegó en el acto inicial de negativa, lo vino a decir en este otro, sólo para justificar su negativa. Pese que, contrario lo que indica el a quo, si está probado que la actora convivió con el causante y que hizo actos de

esposa prestando la ayuda y socorro mutuo"; frente a lo cual recuerda que: "dicha norma especial establece los requisitos y condiciones para el reconocimiento de este tipo de prestaciones económicas, sin incluir el estudio de la prestación inicialmente reconocida al causante. Así, la normativa sólo prevé que para el reconocimiento de la prestación de sustitución de la pensión debe cumplir la condición sine qua non de la convivencia entre el causante y el beneficiario en los últimos 5 años antes de fallecimiento"; condiciones que aduce, su mandante sí cumple; toda vez que:

- Mi mandante y el causante contrajeron matrimonio católico el 05 de julio de 1978.

- Desde el año 1978 hasta el 29 de noviembre de 2020 (fecha de fallecimiento del causante), se mantuvo el vínculo contractual dando cuenta de la vida en pareja, la ayuda y el socorro mutuo las declaraciones aportadas con la demanda.

- Mi mandante dependía económicamente del causante, pues no cuenta con pensión que le ayude a satisfacer sus necesidades básicas, situación de la que dan cuenta la declaraciones extra juicio dadas por señor GUILLERMO BALLEEN MONTENEGRO del día 11 de diciembre de 2020, y la señora LUZ GENOIDE HOYOS RODAS del día 11 de diciembre de 2020, que dieron fe de la convivencia de mi mandante, la señora MYRIAM GUZMAN DE MENA con el causante el señor FRANCISCO JOSÉ MENA CÓRDOBA (Q.E.P.D) desde el 5 de julio de 1978 hasta el 29 de noviembre de 2020 y la dependencia económica de mi mandante con el causante.

Frente a los anteriores hechos destaca que se acreditaron con las pruebas aportadas con la demanda, no siendo necesario el aporte de nuevas pruebas junto con la solicitud de la medida cautelar.

Aunado a lo anterior, solicita que se tenga en cuenta el deterioro de salud del causante que implicó tramitar proceso de interdicción a fin que se nombrara curador para la administración de los bienes del causante, habiendo sido elegida para el efecto la demandante, por ser la persona más idónea para ello, además que la convivencia en el mismo techo en el último período no fue posible en razón a los cuidados que tenía que recibir el causante de personal especializado, pero figurando la actora como su curadora, acudiente ante el centro de cuidado; por lo cual ya no era posible que la demandante le proveyera un cuidado especializado, sin que ello impidiera la ayuda y el apoyo mutuo entre la pareja.

CONSIDERACIONES

El artículo 238 de la Constitución Política atribuye a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la competencia para suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación judicial, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley.

El artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que la suspensión provisional de los efectos de los actos acusados se decretará cuando se concluya que ellos vulneran las normas superiores invocadas y establece como requisitos para su procedencia lo siguiente:

“ARTÍCULO 231. REQUISITOS PARA DECRETAR LAS MEDIDAS CAUTELARES. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos

procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurren los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.
2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.
3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.
4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:
 - a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable,
o

b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios”.

Subrayado y negrilla fuera del texto original.

Como se evidencia, el inciso primero de la norma citada prevé que, para decretar la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, debe confrontarse el acto sobre el que verse la solicitud, con las normas invocadas como transgredidas.

Frente al tema el H. Consejo de Estado ha precisado que la nueva regulación de la suspensión provisional establecida en la Ley 1437 de 2011, prescinde de la “manifiesta infracción” exigida en la antigua legislación, y “presenta una variación significativa en la regulación de esta figura, por cuanto la norma obliga al juez administrativo a realizar el análisis entre el acto y las normas invocadas como transgredidas y a estudiar las pruebas allegadas con la solicitud” ; lo cual implica llevar a cabo un estudio más detallado de la situación.

Teniendo en cuenta lo anterior y retomando los argumentos expuestos por las partes, el Despacho reconsiderará su decisión inicial de no acceder al decreto de la medida cautelar, por las siguientes razones:

En primer lugar, se observa que, esta sede judicial se encuentra facultada para efectuar un análisis de las circunstancias, tomando en cuenta la violación de las normas que se reputan como vulneradas y la prueba sumaria del perjuicio, por encontrarnos ante una solicitud de restablecimiento del derecho.

En ese orden, debe señalarse que si bien en un primer momento se consideró que la actora no había aportado “documentos, informaciones, argumentos y

justificaciones”, que permitieran establecer qué tan gravosa sería la situación en caso de no acceder a la suspensión de los actos administrativos mencionados, y que esta consideración fue determinante para no acceder al decreto de la medida; el Despacho reconsidera su decisión inicial por las siguientes razones:

En primer lugar, no puede perder de vista esta sede judicial que si bien los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que amparan la solicitud de decreto de la medida cautelar sí obran en el plenario, pues al efectuar un análisis del mismo, no puede el Despacho en una correcta y armónica aplicación del derecho obviar o dejar de lado que, junto con la demanda se allegaron varios documentos que dan cuenta del vínculo que existía entre el causante y la demandante, de la dependencia económica que esta tenía con aquel y principalmente, que, en el Juzgado 12 de Familia de Bogotá, fue adelantado un proceso que culminó con la declaratoria de interdicción judicial del causante, señor Francisco José Mena Córdoba, por enfermedad mental y como consecuencia de ello, fue designada como curadora su esposa, la aquí demandante, señora MYRIAM GUZMÁN DE MENA.

En ese orden, se observa que en sede del citado proceso, se tuvieron en cuenta pruebas que dieron cuenta del cuidado que la actora propinaba al causante durante todo el tiempo de su enfermedad y que, los recursos provenientes de la pensión gracia que le fuera reconocida en vida fueron parte del sustento económico de los dos; dado que en esa instancia se comprobó que la aquí demandante no tenía ingresos diferentes a los de su esposo y que ellos estaban destinados, se reitera, a la subsistencia de los dos.

En ese mismo sentido, se probó que, la demandante era la persona más idónea para administrar los bienes de su esposo, dado que destinaba todo el tiempo a estar con él y cuidarlo.

Tampoco puede dejar de lado el Despacho que, tal como lo refiere el apoderado de la demandante, junto con el libelo introductorio, fueron allegadas las siguientes pruebas documentales:

1. Copia del Registro Civil de Nacimiento de la demandante, señora MYRIAM GUZMÁN DE MENA.
2. Copia del Registro de Nacimiento del causante, señor FRANCISCO JOSÉ MENA CÓRDOBA.
3. Copia de la cédula de ciudadanía de la demandante.
4. Copia de la cédula de ciudadanía del causante.
5. Copia del Registro Civil de Matrimonio de la demandante con el causante.
6. Copia de la sentencia de interdicción del 05 de diciembre de 2008, por la cual el JUZGADO DOCE DE FAMILIA DE BOGOTÁ reconoce el estado de interdicción del señor FRANCISCO JOSÉ MENA CÓRDOBA y reconoce como su curadora a la señora MYRIAM GUZMAN DE MENA.
7. Copia del acta de la audiencia de posesión de curadora legítima dentro del proceso de interdicción de FRANCISCO JOSÉ MENA CÓRDOBA del 24 de marzo de 2009.
8. Copia de la Resolución 2767 del 05 de junio de 2012 de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ por la cual se ordena el pago de mesadas pensionales a la demandante.
9. Copia del Auto ADP 001003 del 23 de enero de 2013 NOT 051973 de la UGPP por el cual se designa en vida de su esposo, a la señora MYRIAM GUZMAN DE MENA la pensión de jubilación del señor MENA CÓRDOBA.
10. Copia de la declaración de convivencia de la demandante con el causante el desde el 5 de julio de 1978 hasta el 29 de noviembre de 2020.
11. Copia del Registro de Defunción del causante.
12. Copia de la carta de presentación con fecha del 07 de diciembre de 2020 a la UGPP en la que la demandante informa del fallecimiento del señor FRANCISCO JOSÉ MENA CÓRDOBA el día 29 de noviembre de 2020 y

anexa el certificado de defunción y reclamación de pensión de sobrevivientes.

13. Copia formulario único de solicitudes prestacionales de la UGPP diligenciado por la demandante el 07 de diciembre de 2020.
14. Copia del acta de declaración juramentada del señor **GUILLERMO BALLE MONTENEGRO** del 11 de diciembre de 2020, que da fe de la **convivencia** entre la demandante con el causante **desde el 5 de julio de 1978 hasta el 29 de noviembre de 2020.**
15. Copia del acta de declaración juramentada de la señora **LUZ GENOIDE HOYOS RODAS** del 11 de diciembre de 2020, que da fe de la **convivencia** de la demandante con el causante **desde el 5 de julio de 1978 hasta el 29 de noviembre de 2020 y de la dependencia económica de la demandante con el causante.**

Teniendo en cuenta lo anterior, es procedente derivar que, ante la ausencia del causante, titular de la pensión, la persona que, además de ser su esposa, estaba pendiente de él, aún en su etapa final de la enfermedad y haber sido designada por sentencia judicial como curadora; ella sufriera un perjuicio por cuenta de la mengua los ingresos que percibía y que contribuían para su subsistencia, lo que precisamente la lleva a solicitar el reconocimiento y pago de la aludida pensión gracia.

Por otra parte y de cara a las argumentaciones esgrimidas por la UGPP, relacionadas con que no hay lugar a decretar la medida cautelar solicitada, en atención a que, desde un comienzo, el causante ni siquiera tenía derecho al reconocimiento de la pensión gracia; el Despacho se permite citar apartes de la sentencia T-136/19 de la H. Corte Constitucional en la que la alta corporación expresó lo siguiente:

“Sustitución pensional de la pensión gracia

22. La norma que regula la sustitución de la pensión gracia es la Ley 71 de 1988^[43], pues se trata de **“un derecho de carácter especial que tiene vida propia o autonomía frente al régimen pensional ordinario, por su condición de derecho adquirido concedido por el legislador y con el rango de protección constitucional. Por tanto, su reconocimiento es directo e independiente de cualquier otra situación ordinaria”**^[44]. Al efecto, el artículo 3º de la citada ley expresa:

“ARTICULO 3o. Extiéndase las previsiones sobre sustitución pensional de la Ley 33 de 1973, de la Ley 12 de 1975, de la Ley 44 de 1980 y de la Ley 113 de 1985 en forma vitalicia, al cónyuge supérstite compañero o compañera permanente, a los hijos menores o inválidos, a los padres o hermanos inválidos que dependan económicamente del pensionado, en las condiciones que a continuación se establecen:

1. El cónyuge sobreviviente o compañero o compañera permanente, tendrán derecho a recibir en concurrencia con los hijos menores o inválidos por mitades **la sustitución de la respectiva pensión** con derecho a acrecer cuando uno de los dos órdenes tengan extinguido su derecho. De igual manera respecto de los hijos entre sí.

2. Si no hubiere cónyuge o compañero o compañera permanente, la sustitución de la pensión corresponderá íntegramente a los hijos menores o inválidos por partes iguales.

3. Si no hubiere cónyuge supérstite o compañero o compañera permanente, ni hijos menores o inválidos, la sustitución de la pensión corresponderá a los padres.

4. Si no hubiere cónyuge supérstite, compañero o compañera permanente, ni hijos menores o inválidos, ni padres, la sustitución de la pensión corresponderá a los hermanos inválidos que dependan económicamente del causante." (Negrilla y resalto fuera del texto)

(...)

"Así mismo, considera pertinente la Sala advertir que en casos excepcionales de falsedad o ausencia de documentación, en los cuales una persona obtiene indebidamente el reconocimiento y pago de una pensión gracia, la Administración podrá acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a efectos de pretender dejar sin efectos el respectivo acto administrativo de reconocimiento y evitar que se configure un perjuicio grave al Sistema General de la Seguridad Social."

^[43] Ley 71 de 1988 *"Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones"*.

^[44] Sentencia T-779 de 2014.

Subrayado y negrilla fuera del texto original.

En la misma providencia, a renglón seguido, la suprema guardiana de nuestra Constitución hace una referencia del **principio de la seguridad jurídica**; definiéndolo como: “aquella cualidad que tiene el ordenamiento jurídico relativo a la certeza del Derecho cuando el mismo se aplica. Es, en consecuencia, un factor razonable de previsibilidad jurídica en tanto presupuesto y función del Estado, que genera confianza para el administrado, quien advierte que una situación no se va a alterar o modificar de manera súbita o repentina. Este principio sirve también al Estado como mecanismo para limitar su actuar, al adecuarlo a través de un funcionamiento ordenado, regulado y preestablecido, que le impide crear formas jurídicas distintas. Lo anterior no supone la petrificación de las leyes y de los procedimientos, pero sí asegura que de darse un cambio el mismo no sea sorpresivo sino que permita que la evolución del ordenamiento jurídico se surta de manera organizada y publicitada”.

Continuó la alta corporación explicando que la interpretación de dicho postulado debe realizarse en relación con otros principios y derechos consagrados en el ordenamiento jurídico, “pues no se trata de una disposición que pueda concebirse de forma aislada o independiente” y que, “es dable concebir que guarde relación con criterios de: competencia funcional; términos de decisión o para debatir cuestiones jurídicas (perención, caducidad o prescripción); posibilidad para ejercer derechos o instrumentos procesales; y en general, poder prever las reglas que definen el devenir de los trámites judiciales” por lo que, en últimas, “se relaciona con la posibilidad del individuo para no ser sorprendido en situaciones en las que puedan resultar comprometidos o afectados sus intereses”; frente a lo cual indica que, “en materia de competencias, la seguridad jurídica opera en una doble

dimensión. De una parte, estabiliza (sin lo cual no existe certeza) las competencias de la administración, el legislador o los jueces, de manera que los ciudadanos no se vean sorprendidos por cambios de competencia. Por otra parte, otorga certeza sobre el momento en el cual ocurrirá la solución del asunto sometido a consideración del Estado”; lo cual llevan a la H. Corte a señalar que este principio de seguridad jurídica representa una garantía de certeza tanto para la administración como para las personas, pues ambas reconocen y están en capacidad de prever hasta dónde puede llegar la otra, sin salirse del margen de la legalidad; constituyendo de esta forma, un presupuesto que posibilita la vigencia de un orden justo, una de las finalidades que legitiman la existencia del Estado, según el artículo 2º de la Constitución; planteamiento que fue desarrollado en la sentencia SU-014 de 2001, en la que se expresó que: “la seguridad jurídica que sirve de sustento para lograr un orden justo no puede ser el resultado de un proceso en el cual se viole, en los términos arriba indicados, el debido proceso”.

Todo lo anterior, con el fin de explicar que, el acto administrativo por medio del cual se efectúa el reconocimiento de la pensión gracia, o se niega el derecho; está amparado por el aludido principio de seguridad jurídica, que unido también al **principio de presunción de legalidad de los actos administrativos** (que igualmente aborda en la misma providencia la H. Corte Constitucional); la llevan a afirmar que, siempre que tal acto administrativo no sea demandado por el afectado o beneficiado o por la propia administración, previo agotamiento del procedimiento de revocatoria directa, se presume legal y está irradiado por el principio de seguridad jurídica, de manera que, no es procedente que de forma posterior y por las razones, que sean, la persona sea sorprendida de una forma súbita y repentina bajo el amparo de un indebido ejercicio de cambio de competencia, con la consideración que las razones que, en su momento sirvieron de fundamento para tomar la decisión correspondiente ya no son válidas, como ocurre en el presente caso, en el que, el acto de reconocimiento de la prestación al causante, no ha sido

atacado y por lo tanto se presume legal y por cuenta de su acatamiento se predica la seguridad jurídica, pero, pese a ello, la UGPP hoy lo pretende desconocer, cuando se está reclamando la sustitución del derecho.

En este punto debe aclararse que los anteriores planteamientos o consideraciones se esbozan en el presente proveído, teniendo en cuenta que, entre otras, fueron argumentaciones que la UGPP planteó para oponerse al decreto de la medida cautelar.

Con todo, se reitera que contrario a lo considerado inicialmente, sí existen elementos de hecho y de derecho, con las correspondientes pruebas, que permiten concluir que se encuentran cumplidos los requisitos para acceder al decreto de la medida cautelar.

En mérito de lo expuesto, el Despacho

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el auto por medio del cual se negó la medida cautelar solicitada por la parte actora, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, **ORDENAR** a la **UGPP**, **DEJAR SIN EFECTOS** las resoluciones **RDP 029501 del 18 de diciembre de 2020**, **RDP 007032 del 17 de marzo de 2021** y **RDP 007323 del 19 de marzo de 2021**; que negaron el derecho a sustituir la pensión gracia, en su lugar se reconozca de forma transitoria el derecho, hasta tanto se resuelva de fondo el proceso.

TERCERO: ORDENAR a la **UGPP**, a título de medida cautelar, el reconocimiento y pago de la **pensión de sobrevivientes - gracia** en favor de la demandante, a partir del 31 de diciembre de 2020; de acuerdo a la parte motiva de este proveído.

CUARTO: En firme esta providencia, ingrese el expediente al Despacho para continuar con el trámite correspondiente.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



ENRIQUE ARCOS ALVEAR
JUEZ

MV

PARTES	CORREOS ELECTRÓNICOS
DEMANDANTE: MYRIAM GUZMÁN DE MENA	 myguz52@yahoo.com valenciaabogado@hotmail.com
DEMANDADA: UGPP	 bbautista@martinezdevia.com notificacionesugpp@martinezdevia.com
MINISTERIO PÚBLICO: PROCURADOR 191 JUDICIAL PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	 Procjudadm191@procuraduria.gov.co